

**DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

**\*DESDE HOY**

# Vuelos a 36 destinos internacionales

 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que, a partir de hoy, 36 destinos internacionales podrán ser cubiertos por los vuelos comerciales de pasajeros desde el Perú. Estos vuelos tienen un rango de duración de hasta ocho horas. Actualmente ya se puede viajar a Ecuador,



Bolivia, Colombia, Chile, Panamá, Uruguay y Paraguay. Des-



de hoy se podrá hacerlo a Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Jaimaica y Canadá. El titular del MTC, Carlos Estremadoyro, advirtió que los pasajeros que lleguen al país y los que parten desde Lima deberán presentar obligatoriamente la prueba molecular, usar mascarillas y protector facial. 



ANCON, DICIEMBRE 24 DE 2020

DRA. ADRIANA VILLANUEVA ARCILA  
COORDINADORA GRUPO ASUNTOS INTERNACIONALES  
Y PROTOCOLO.  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO  
INPEC.

- ADRIANA.VILLANUEVA@INPEC.GOV.CO
- ATENCIONALCIUDADANO@INPEC.GOV.CO
- ASUNTOSINTERNACIONALES@INPEC.GOV.CO

DOCTOR  
WILSON RUIZ

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

- GESTION.DOCUMENTAL@MINJUSTICIA.GOV.CO

DOCTOR  
ANDRES IDARRAGA FRANCO  
COMISION DE DERECHOS HUMANOS

- ANDRES.IDARRAGA@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
- NOTIFICA.JUDICIAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO

DOCTOR  
RAFAEL GUILLERMO ARÍZMENDY JIMENEZ  
COORDINADOR DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO  
DE ASISTENCIA A CONACIONALES EN EL EXTERIOR  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

- CONTACTENOS@CANCILLERIA.GOV.CO

DOCTORA  
LAURA VICTORIA DIAZ HENAO  
VICECONSUL

CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA EN LIMA

- LAURAVICTORIA.DIAZ@CANCILLERIA.GOV.CO
- CLIMA@CANCILLERIA.GOV.CO

DOCTORA  
LINDA TORRES CASTRO  
COORDINADORA DEL GRUPO TRASLADO DE  
PERSONAS CONDENADAS  
LINDA.TORRES@MINJUSTICIA.GOV.CO  
WWW.MINJUSTICIA.GOV.CO

REF. DERECHO DE PETICION  
SU OFIC. N° 8100-DINPE-GUINP//2020EE0189632  
DICIEMBRE 15 DE 2020



6

95

RESPECTADA DRAGONEANTE VILLANUEVA  
Y DEMAS FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS Y  
GUBERNAMENTALES:

ATENTAMENTE ME PERMITO DAR RESPUESTA  
A SU OFICIO EN REFERENCIA, CON EL CUAL  
DA ATENCION A MI DERECHO DE PETICION  
FECHADO EN DICIEMBRE 14 DE 2020.

- ME SORPRENDO UNA VEZ MAS, POR NO HABER  
ENCONTRADO CASI QUE A NINGUNA DE  
MIS PETICIONES, ALGUN COMENTARIO O  
SOLUCION A MIS INQUIETUDES QUE SON  
DE LA COMPETENCIA DEL INSTITUTO AL  
CUAL USTED REPRESENTA EN TAN  
IMPORTANTE CARGO COMO CONCEDORA  
Y RESPETUOSA DE LOS DERECHOS HUMA-  
NOS.
- ESA COLABORACION ARMONICA, LOGISTICA  
QUE REQUIEREN PARA EFECTUAR LA  
PROGRAMACION ANTICIPADA, PARA PODER  
DARLE CURSO A LA REPATRIACION A LA  
CUAL USTED AMPLIAMENTE ME HACE  
CONOCER AHORA, EXTENSAMENTE EN SU  
OFICIO, TUVO EL TIEMPO MAS QUE  
NECESARIO PARA EFECTUARLO DESDE  
EL 09 DE OCTUBRE DEL 2019 FECHA EN LA  
CUAL LA DOCTORA CAMILA APIANADOR  
VARGAS EN OFICIO N° MJD-OF119-0030249-  
DAI-1100 "SOLICITA SE INFORMEN LAS  
COORDINACIONES REALIZADAS POR EL INPEC  
CON LAS AUTORIDADES DE LA REPUBLICA DEL  
PERU PARA CUMPLIR CON EL TRASLADO POR  
PARTE DEL MINISTERIO, PREVIAMENTE AUTORI-  
ZADO" Y ADENAS EL INPEC YA TENIA CONO-  
CIMIENTO DESDE EL 11 DE FEBRERO  
DEL 2019 CUANDO RECIBIO COPIA DE LA  
RESOLUCION OJSI DONDE SE APROBO



MÍ TRASLADO Y EN LA MISMA RESOLUCIÓN  
LES NOTIFICA EL MINISTERIO DE JUSTICIA  
"PARA QUE COORDINE CON LAS ENTIDADES  
CORRESPONDIENTES DE LA REPÚBLICA  
DEL PERÚ."

ES DECIR, USTED SEÑORA DRAGONEANTE  
TUVO (1) UN AÑO Y (1) UN MES HASTA LA  
FECHA DEL 11 DE MARZO DE 2020 EN LA  
CUAL "EL INPEC" EMITE LA DIRECTIVA 004/20

- A PESAR QUE ME ACOGI A LA CONSTITUCIÓN  
POLÍTICA DE NUESTRO PAÍS, EN CUYO ARTÍCULO  
SOBRE "LA IGUALDAD ANTE LA LEY", EN RAZÓN A  
QUE EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020, EL  
CONACIONAL JAIME ALVARO RODRIGUEZ  
PAICHELO FUE TRASLADADO EN EXTRADICIÓN  
DESDE LIMA-PERÚ A LA CARCEL DE LA PICOTA EN  
BOGOTÁ-COLOMBIA, ADEMÁS MI FAMILIA EN  
COLOMBIA MEDIANTE AMIGOS DE LA POLICIA Y  
EMPLEADOS DEL INPEC LES HAN COMUNICADO QUE  
LAS PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN DETENI-  
DAS Y DEBIDO AL ESPACIO REDUCIDO ESTABAN  
HACINADAS Y FUERON ASIGNADOS EN DIFERENTES  
CENTROS DE RECLUSIÓN.  
ESTO NOS LLEVARIA A PENSAR, QUE EXISTE UNA  
CONTRADICCIÓN EN LO ORDENADO EN LA  
DIRECTIVA 004/2020 O ES QUE ESTA DIRIGIDA  
UNICAMENTE A DETERMINADOS DELITOS?  
ME HUBIERA GUSTADO QUE ME HUBIERA ESCANEADO  
EN SU COMUNICADO COPIA DE LA DIRECTIVA EN MENCIÓN

CUANTO A SU RECOMENDACIÓN FINAL QUE  
EVIDENCIANDO ASÍ UN RIESGO LATENTE DE  
CONTAGIO PARA EL SEÑOR JAIME ALVARO  
PAICHELO. SI EN ESTOS  
MOMENTOS SE LLEGASE A MATERIALIZAR  
LA REPATRIACIÓN, PUES SE PUEDE AFECTAR  
EL ESTADO DE SALUD Y VIDA, ESPECIAL-  
MENTE POR LAS PATOLOGÍAS QUE PADECE."

SEÑORA DRAGONEANTE, ESTO AUN MÁS  
LLEVA A RECONFIRMAR MI CONCEPTO DE:



1.- FUE QUE USTED NO LEYO MI DERECHO DE PETICION.

2.- O DE PRONTO YO NO FUI LO SUFICIENTEMENTE CLARO, PARA QUE INTERPRETARA MI SOLICITUD.

- "ANTE MI TEMOR A UN SEGUNDO REBROTE DEL VIRUS MORTAL DEL COVID 19 Y ANTE LAS SITUACIONES QUE VIVIMOS LOS PRESOS EXTRANJEROS EN EL PERU EN CONDICIONES INFRAHUMANAS, PESIMOS SERVICIOS HIGIENICOS, NOS RACIONAN EL AGUA Y EL FLUIDO ELECTRICO HASTA TRES (3) DIAS A LA SEMANA, SE IMAGINA; 5 TASAS SANITARIAS PARA 150 INTERNOS DE UN PABELLON SIN AGUA? SIN SERVICIOS DE COMEDORES, NOS TOCA SENTARNOS EN EL SUELO A CONSUMIR LA ESCASA COMIDA, INADECUADA Y DESBALANCEADA, SOLO RECIBIMOS  $\frac{1}{8}$  DE POLLO 2 VECES A LA SEMANA EL RESTO ES A BASE DE ARROZ Y PAPA.

CARECEMOS DE ATENCION MEDICA, SOLO NOS ATIENDEN A 2 (DOS) INTERNOS POR CADA PABELLOS DE 150 INTERNOS, ES DECIR EL DIA QUE LOGRAMOS QUE NOS LLEVEN AL TUPICO ES COMO SI NOS GANARAMOS UNA LOTERIA Y ADEMAS, PARA LOGRAR EL PREMIO DEBEMOS DE CONTAR QUE DISPONGAN DE MEDICAMENTOS DONADOS Y CON FECHA PRACTICAMENTE VENCIDA.

- DEBIDO A ESTAS SITUACIONES DE MALTRATO SIQUICO, MORAL, INFRAHUMANO Y A NUESTRA DIGNIDAD PERSONAL FUE QUE EXPUSE ALGUNOS PARRAFOS Y LE ANEXE COPIA DE LAS RECOMENDACIONES EXPEDIDAS POR LA OINW - OFICINA DE DERECHOS HUMANOS: (ALGUNOS A PARTES)

"LA OINW PIDE LIBERACION DE PRISIONEROS VULNERABLES POR CAUSA DE LA PANDEMIA DEL COVID 19 CORONAVIRUS"

"[... ] LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS PIDIO LA



REDUCCION DEL NUMERO DE PERSONAS  
EN DETENCION ANTE EL INMINENTE RIESGO  
QUE SE AVISORA POR EL CRECIMIENTO DEL  
CORONAVIRUS EN GRAN PARTE DEL MUNDO."

[...] BACHELET PIDIO INCLUSO, REDUCIR LA  
POBLACION CARCELARIA SI ES NECESARIA PARA  
BAJAR LOS FACTORES DE RIESGO. LAS AUTO-  
LIBERAR DEBERIAN BUSCAR FORMAS PARA  
MENTE VULNERABLES AL COVID 19 ENTRE  
ELLOS LOS DETENIDOS MAS VIEJOS (95.6)  
& ENFERMIOS (MICHAEL PATOLOGICO CLASIFICA),  
TAMBIEN CONVICTOS DE CRIMENES MENORES;  
ACONSEJO LA OMU." [...].

ENTIENDO QUE ESTAS RECOMENDACIONES NO  
SON DE SU COMPETENCIA, SINO DEL GOBIERNO  
PERO LAS TRAIGO A EJEMPLO, PARA DARLE A  
ENTENDER, QUE EN MI CASO PARTICULAR  
SOY DOBLEMENTE VULNERABLE, UNA POR  
MIVIEJEZ Y LA OTRA POR LAS PATOLOGIAS QUE  
PADESCO Y AQUI SOLO ME DAN TRATAMIENTO  
PARA LA DIABETIS Y LA HIPERTENSION, PARA  
LAS OTRAS NO.  
ADENAS VUELVO Y LE REITERO: YO ESTANDO  
EN COLOMBIA, DURARIA PRESO MIENTRAS ME  
ASIGNAN UN JUEZ DE PENAS Y MEDIDAS DE  
SEGURIDAD PARA OBTENER MI LIBERTAD  
CONDICIONAL.

AHORA ME PERMITO HACERLE UN ANALISIS  
COMPARATIVO, SOBRE EL HACINAMIENTO  
QUE SE ESTA VIVIENDO TANTO EN COLOMBIA  
COMO EN EL PERU Y USTED SACARA SUS  
CONCLUSIONES, SI DEJANDOME EN  
PERU, ME ESTARIA SALVAGUARDANDO LA  
VIDA AL NO MATERIALIZAR MI REPATRIACION  
O POR EL CONTRARIO TANTO USTED Y SU  
ORGANISMO "INPEC" QUE REPRESENTA  
SE ESTARIAN CONVIRTIENDO EN



COMPLICES DE UNA MUERTE ANUNCIADA,  
PUES COMO USTED ES DEBIDAMENTE  
CONCEDORA, QUE YO ACTUALMENTE  
DEPENDO Y ESTOY SOLO A LA DISPOSICION  
DEL GOBIERNO COLOMBIANO Y EL MINIS-  
TERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO LE  
CONCEDIO PLENO PODER Y AUTORIDAD,  
PARA QUE COORDINARA CON EL INPIE-PERU  
EL PLAN DE DESPLAZAMIENTO PARA MITRASLADO  
DESDE EL 11 DE FEBRERO DEL 2019 Y EN  
CASO DE QUE YO LLEGARE A MORIR, MI  
FAMILIA YA ESTA ENTERADA PARA QUE LLEVE  
A CABO LA RESPECTIVA DENUNCIA, Y NADIE ESTA  
LIBRE DE IR A UNA CARCEL POR UN HOMICIDIO  
CULPOSO O POR PREVARICATO.

PARA SU INFORMACION LE ACOMPAÑO COPIA  
DE LA COMUNICACION RADICADA EN MESA  
DE PARTES EL 07 DE DICIEMBRE DE 2020  
- A LAS 14.05.36 HORAS REGISTRO 20-0025536  
CLAVE 9541 DIRIGIDA AL SEÑOR PRESIDENTE  
FRANCISCO SAGASTI HOCHHAUSLER - DE LA  
REPUBLICA DEL PERU, LA CUAL SE EXPLICA  
POR SI MISMA Y ADEMÁS LE RECUERDO  
EL INDICE DE HACINAMIENTO QUE COMPA-  
RADO CON EL COLOMBIANO ES EXTREMADA-  
MENTE ALARMANTE Y ESTO, LA ILUSTRE A UD  
SEÑORA DRAGONIANTE, POR QUE VENGO  
LUCHANDO POR MI REPATRIACION POR CASI  
CUATRO (4) AÑOS, DONDE MIS PRIMEROS  
NUEVE AÑOS (9) QUE ESTUVE RECLUIDO EN  
EL PENAL DE SARITA COLONIA EN EL  
CALLAO; LOS PASILLOS POR DONDE  
ESCASAMENTE PODIAMOS CAMINAR, EN  
LA NOCHE SE CONVERTIAN EN NUESTROS  
DORMITORIOS, DONDE PEGABAMOS COLCHONETA  
CON COLCHONETA DE 90CMS. Y EN CADA UNA  
DORMIAMOS 2 PERSONAS, ALLI CONTRAJE T.B.E



"TOMANDOME LA INICIATIVA Y VOCERIA  
DENTRO LOS 593 PRESOS CON NACIONALES  
COLOMBIANOS PRESOS, DE ACUERDO A ESTA-  
DISTICAS DE INPIE:"

<u>INDICE COMPARATIVO:</u>	<u>PERU</u>	<u>Colombia</u>
Poblacion ACTUAL EN CARCEL	95.000	98.257
CAPACIDAD O CUPOS (CAMAS)	39.323	80.669
SOBREPoblACION.	55.677	17.588
PORCENTAJE HACINAMIENTO	143%	21.8%

SEÑORA DRAGONEANTE VILLANUEVA, COMO  
USTED PODRA OBSERVAR, SOBRAN LOS COMEN-  
TARIOS, Y LE RUEGO SE PONGA LA MANO EN EL  
CORAZON, EXCUSAME SI DE PRONTO EN MI  
DESESPERO E UTILIZADO ALGUNAS FRASES  
O PALABRAS QUE LA PUDE HABER OFENDIDO,  
LE RUEGO QUE ME ENTienda PORQUE ES  
MI AFAN DE RETORNAR A MI PAIS, TENGO  
2 HIJOS MENORES, UNA COMPAÑERA Y UNA  
HERMANA QUE NO VEO POR AÑOS Y SOLO  
CUENTO CON UNA PENSION, QUE ME TOCA  
IR A LUCHAR PARA QUE ME LA OTORGUEN;  
PUES EN PRIMERA INSTANCIA ME LA HAN NEGADO.  
AL CONSULADO Y PERSONAL DIPLOMATICO  
EL DOCTOR EMILIO MERINO, LA SEÑORA  
VICECONSUL LA DOCTORA LAURA VICTORIA  
DIAZ HENAO, AL DOCTOR ALAN, SOLO ME  
RESTA REITERARLES UNA Y MIL VECES MAS,  
MIS MAS SINCEROS AGRADECIMIENTOS POR  
TODO SU ACOMPAÑAMIENTO, ASESORIAS,  
SU ARDUO E INCANSABLE LABOR PARA QUE  
LA GRAN MAYORIA CONTINUOS CON LA ESPERAN-  
ZA DE RETORNAR A NUESTRO PAIS Y MUCHOS  
OTROS YA ESTAN EN COLOMBIA EN SUS  
HOGARES AL SER EXPULSADOS, ES DECIR  
NUESTRO BANCO DE FAVORES ESTARA



101

8

SIEMPRE SOBREGIRADO, PUES NO HAY NADA  
EN EL MUNDO CON QUE LES PODAMOS RETRI-  
BUIR, HA SIDO EL GRUPO DE FUNCIONARIOS  
DIPLOMATICOS, CON EL CUAL NUESTRO  
GOBIERNO CENTRAL NOS A PREMIADO, PUES  
NOS HAN HECHO SENTIR QUE A PESAR QUE  
ESTAMOS PRIVADOS DE NUESTRA LIBERTAD,  
ELLOS SIEMPRE HAN ESTADO, COMO DECIMOS,  
AL PIE DEL CAÑON, ATENTOS A SOLUCIONARNOS  
E INTERCEDER ANTE LOS DIRECTORES DE  
LOS PENALES, PARA QUE POR LO MENOS NOS  
ATIENDAN EN NUESTRA SALUD Y LA GRAN  
MEDALLA DE ORO A QUE SON MERECEDO-  
RES ES POR HABER LUCHADO Y CONSEGUIDO  
UN PRESUPUESTO, CON EL CUAL ALEGRARON  
NUESTROS CORAZONES Y EN ESTA NAVIDAD,  
NO LA IREMOS A PASAR TAN MAL, TENEMOS  
BUENOS ALIMENTOS NUTRITIVOS Y  
MEDICINAS PARA CONTRIBUIR A MEJORAR  
NUESTRAS DEFENSAS, IGUALMENTE TODOS  
ESTOS AGRA DECIMIENTOS QUE SEAN  
PORTADOS A NUESTRO ILUSTRE PRESIDENTE  
DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. EL  
DOCTOR IVAN DUQUE MARQUEZ,  
TAMBIEN POR EL LOGRO DE ADQUISICION DE  
LAS 40 MILLONES DE DOSIS DE VACUNAS  
CONTRA EL COVID 19 Y ESTE PAIS BATIO  
"RECORD GUINNES": EN UN PERIODO PRESI-  
DENCIAL TUVIERON (2) DOS CONGRESOS Y (5)  
PRESIDENTES, UNA DURA (UNA) HORA Y  
(1) CERO CONTRATOS CON LABORATORIOS  
PARA ADQUIRIR LA VACUNA, ES DECIR,  
EL PUEBLO PERUANO ESTA DESAMPARADO,  
QUE SERA DE LOS PRESOS EXTRANJEROS?  
ESTAREMOS DESTINADOS A LLENAR LAS  
FOSAS COMUNES, COMO UNOS "NN" MAS  
DE LOS TANTOS QUE HAY (PRESOS Y CIVILES)  
QUE NUNCA SALIERON A LA LUZ PUBLICA.



A LA DOCTORA LAURA VICTORIA DIAZ HENAO  
 LE ADJUNTO COPIA DE JUNTA MEDICA  
 APROBADA DESDE FEBRERO CON EL FIN  
 DE QUE SEA LLEVADO A UN HOSPITAL Y  
 METRASEN EL PROBLEMA PROSTATICO  
 QUE PADESCO DESDE HACE 5 AÑOS Y  
 NO A SIDO ATENDIDO NI REQUERIMIENTO.

EN ESPERA DE UNA GRATA RESPUESTA  
 POR PARTE DEL INPPE CASO CONTRARIO  
 ME VERE OBLIGADO A INTERCEDER  
 Y HACER USO DE UNA ACCIÓN O RECURSO  
 ANTE UNA INSTANCIA JURIDICA QUE  
 PROTEJA MIS DERECHOS CONSTITUCIONALES  
 A QUE TENGO DERECHO.

ATENTAMENTE,



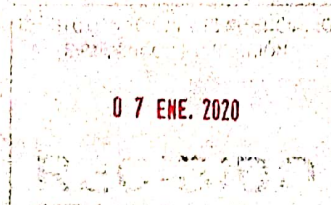
JAIME TULIO CARDONA DEJARANO  
 CEDULA DE CIUDADANIA #19139.057  
 JAIME TULIO 123@GMAIL.COM.

ANEXO : LO ANUNCIADO EN FOLIOS 9

COPIA A: CRUZ ROJA COLOMBIANA  
 DESPACHOS@CRUZROJACOLOMBIANA.ORG  
 ONU - DERECHOS HUMANOS  
 INFODESK@OHCHR.ORG  
 MEDIA@OHCHR.ORG  
 LISBET CARDONA PANTOJA  
 EEP5@ICLOUD.COM.  
 DOCTOR  
 IVAN DUQUE MARQUEZ  
 PRESIDENTE  
 REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IVANDUQUE@PRESIDENCIA.GOV.CO  
 CONTACTO@PRESIDENCIA.GOV.CO  
 WWW.PRESIDENCIA.GOV.CO



DIRECTORA  
E.P. ANCON II  
PRESENTE.



REF. : SOLICITUD AUTORIZACION PARA  
JUNTA MEDICA PARA TRATAMIENTO  
A LA PROSTATA.

RESPECTADA DOCTORA:

ATENTAMENTE SOLICITO

SU AUTORIZACION PARA QUE INTERSEDA ANTE EL  
CONCEJO DISCIPLINARIO, QUIENES PODRAN AUTO  
RIZAR MI SALIDA AL HOSPITAL DEL CARRON  
DONDE FUI TRASLADADO EN DOS OCASIONES  
PRATICANDOME LOS RESPECTIVOS EXAMENES  
DE SANGRE, ORINA Y ECOGRAFIAS A LA  
PROSTATA, PUES POR MI VIENE SIENDO  
UN GRAVE PROBLEMA DESDE HACE TRES  
AÑOS PARA EVACUAR MI ORINA NORMALMENTE.  
LO ANTERIOR, EN RAZON A QUE POR MI  
AVANZADA EDD (68). ES NORMAL ESTOS  
CASOS QUE SE PRESENTAN EN LA MAYORIA  
DE LOS HOMBRES.

NO HABIA RECURRIDO ANTES, PUES SEGUN  
MI EMBAJADA MI TRASLADO INTERNACIONAL  
POR RAZONES HUMANITARIAS A MI PAIS DE  
ORIGEN (COLOMBIA) ESTABA LISTO, PERO  
LAS AUTORIDADES JUDICIALES DE ESTE PAIS  
AUN NO SE HAN PRONUNCIADO  
ATENTAMENTE

JAIMETULIO CARDONA BEJARANO  
MODULO III - Pab. 3b.



## **ONU pide liberación de prisioneros vulnerables por causa de la pandemia del coronavirus**

Un letrero que dice "más de 30 muertos" se ve en una de las ventanas de las celdas de la prisión de La Modelo después de un disturbio de prisioneros que exigían medidas de salud del gobierno contra la propagación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Bogotá, Colombia. Marzo 22, 2020. © Leonardo Munoz \ Reuters

**La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió la reducción del número de personas en detención ante el inminente riesgo que se avizora por el crecimiento del coronavirus en gran parte del mundo.**

La oficina de Derechos Humanos de la ONU, presidida por Michelle Bachelet, manifestó su preocupación por la llegada del virus a lugares de detención donde el aislamiento es básicamente imposible y pidió medidas urgentes a los gobiernos.

"El Covid-19 ha empezado a golpear prisiones y centros de detención de migrantes, también lugares de cuidado de personas de la tercera edad y hospitales psiquiátricos, esas instituciones están en un riesgo evidente", explicaron en un comunicado.

Bachelet pidió, incluso, reducir la población carcelaria si es necesario para bajar los factores de riesgo. "Las autoridades deberían buscar formas para liberar aquellas personas especialmente vulnerables al Covid-19, entre ellos los detenidos más viejos o enfermos, también convictos de crímenes menores", aconsejó la ONU.

### **Liberar prisioneros para protegerlos del Covid-19**

En Colombia, el debate ya se venía dando luego de que cientos de prisioneros de diez cárceles del país se amotinaron y protestaron la semana pasada ante el miedo que produce la pandemia que ha dejado más de 19.000 muertos en todo el mundo. Las protestas en ese país se saldaron con 23 muertos.

Solo en Colombia, por dar un ejemplo, hay una sobrepoblación carcelaria del 54 %, según cifras oficiales. Las autoridades penitenciarias dicen que hay 124.188 reos en instituciones que tienen capacidad de 80.156 reclusos. Políticos de distintos frentes han empezado a hacer un llamado para que se alivien esas condiciones antes que el virus cause una tragedia.



Esa condición es una de las preocupaciones de Bachelet, que agregó: "La gente está prisionera en condiciones poco higiénicas, con servicios de salud inadecuados o casi inexistentes. La distancia física y el aislamiento en esas condiciones son prácticamente imposibles".

Algunos de los países más afectados por la pandemia ya han empezado a tomar algunas de esas medidas como liberar prisioneros. Estados Unidos, Canadá, Alemania e Irán han liberado a miles de detenidos.

Las autoridades de la cárcel más poblada de Alemania, la de Rhine Norte de - Westphalia, liberaron a 1.000 prisioneros que estaban a poco tiempo de cumplir sus sentencias. Solo excluyeron a condenados por delitos de abuso sexual o prisioneros violentos de la lista.

Con Reuters y AFP



# Los presos también deben ser protegidos de la pandemia de coronavirus

5 Mayo 2020

Derechos humanos

Decenas de presos han perdido la vida en incidentes ocurridos en cárceles de Venezuela, Colombia y Perú, y se han producido intentos de fuga en muchos otros países. El coronavirus se expande rápidamente y miles de internos se han infectado en América del Norte y del Sur. ONU Derechos Humanos pide una investigación por los motines que han ocurrido en las últimas semanas.

La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió investigar los motines que están ocurriendo en cárceles de las Américas para protestar por la falta de protección.

El coronavirus se está expandiendo rápidamente por cárceles sobrepobladas y con falta de higiene. "Miles de prisioneros y funcionarios se han infectado en América del Norte y del Sur", dijo el portavoz.

El peor incidente tuvo lugar el pasado 1 de mayo en la cárcel de Los Llanos en Venezuela, donde 47 presos perdieron la vida. Otro motín en la cárcel de La Modelo, en Colombia, dejó en marzo 23 muertos. En Perú, nueve reos perdieron la vida el 27 de abril. Otros incidentes, incluidos intentos de fuga, han ocurrido en Argentina, Brasil, México y Estados Unidos.

"La escala y gravedad de los incidentes mencionados parece indicar que en algunos casos los Estados no han adoptado las medidas adecuadas para prevenir la violencia en las instalaciones de detención y que los agentes estatales habrían cometido violaciones del uso de la fuerza en su intento por recuperar el control de dichas instalaciones", dijo el portavoz de la Alta Comisionada, Rupert Colville.

Además, algunos países están deteniendo a gente por incumplir las cuarentenas, lo que aumenta el riesgo de infección. Colville habló de la situación en El Salvador donde se están tomando medidas "extremadamente severas" que pueden constituir trato cruel, inhumano y degradante y que pueden exacerbar las condiciones de higiene ya precarias.

"Los problemas estructurales preexistentes, como el hacinamiento crónico y las condiciones antihigiénicas, junto con la falta de acceso adecuado a la atención médica han permitido la rápida propagación de COVID-19 en muchas instalaciones", advirtió la Oficina de Bachelet.

Además, en muchos países, el creciente temor al contagio y la falta de servicios básicos, como la provisión regular de alimentos debido a la prohibición de las visitas familiares, han desencadenado protestas y disturbios.



## Investigaciones, acción y justicia

"Recordamos a las autoridades que el uso de la fuerza debe cumplir estrictamente con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación, y que los Estados tienen el deber de proteger la salud y el bienestar físico y mental de los reclusos, según lo establecido en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, también conocidas como las Reglas de Nelson Mandela", aseguró el portavoz de Bachelet.

La Oficina de la Alta Comisionada hizo un llamado a los países para que lleven a cabo investigaciones exhaustivas, rápidas, independientes e imparciales sobre las circunstancias de las muertes y lesiones durante los disturbios, incluida cualquier denuncia de uso de la fuerza por parte de agentes estatales.

También pidió a los países que tomen las medidas apropiadas para evitar una mayor propagación del virus garantizando condiciones sanitarias, acceso generalizado a las pruebas y acceso a la atención médica necesaria para los detenidos, así como equipos de protección personal y pruebas para el personal de la prisión.

Las autoridades además deben garantizar un nivel mínimo de contactos personales con los miembros de la familia y el acceso adecuado a alimentos y agua potable, así como proporcionar información periódica y transparente sobre el impacto de la enfermedad en los presos y el personal. Las condiciones en los centros de detención y las cárceles, y el tratamiento de los detenidos deben ser monitoreados regularmente por organismos independientes, y los presos que se enferman deben ser colocados en aislamiento no punitivo o en cuarentena en instalaciones donde puedan recibir la atención médica adecuada.

## Liberación en la pandemia sin impunidad

Rupert Colville agradeció las medidas tomadas por algunos Estados para liberar a convictos y a los detenidos preventivamente más vulnerables a COVID-19, incluidos los que tienen afecciones médicas subyacentes, las mujeres embarazadas, los más mayores, los que viven con el VIH y los que cuenta con alguna discapacidad.

"Sin embargo, se necesitan medidas más amplias para reducir los niveles extremos de hacinamiento mediante la liberación de otras categorías de presos que cumplen sentencias cortas por delitos no violentos, así como niños y personas detenidas por delitos de inmigración", dijo.

También es esencial que los Estados garanticen que esas medidas no contribuyan a la impunidad de los crímenes violentos. Las personas condenadas por delitos reconocidos por el derecho internacional después de un



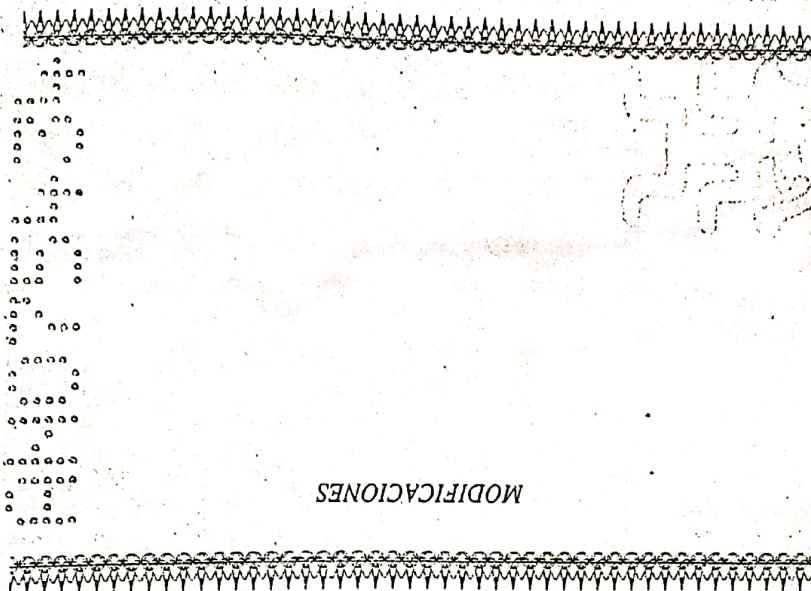
juicio justo y público por un tribunal independiente e imparcial deben considerarse para la liberación temporal de la custodia solo en circunstancias excepcionales.

Según la Oficina de Bachelet, en el contexto de la pandemia, es urgente reducir el uso de la detención preventiva, una medida que siempre debe ser excepcional, pero que se ha utilizado de manera crónica en las Américas. La Orientación provisional del Comité Permanente entre Organismos sobre COVID-19 y las personas privadas de libertad ofrece sugerencias prácticas a los Estados que desean implementar medidas para reducir el hacinamiento en los lugares de detención.

"Las personas detenidas arbitrariamente, sin base jurídica suficiente, o por delitos incompatibles con el derecho internacional, así como todos los encarcelados por ejercer sus derechos humanos, incluida la expresión de opiniones discrepantes, también deben ser liberados", expresó el portavoz.

Finalmente, las autoridades además deben asegurarse de que las personas que han sido liberadas reciban atención médica adecuada.





MODIFICACIONES

## REPUBLICA DE COLOMBIA

PASAPORTE  
PASSPORT

TIPO / TYPE COD. PAIS / CODE COUNTRY PASAPORTE Nº / PASSPORT No.

P

COL

NIIP-1114243922

APELLIDOS / SURNAME

CARDONA BALCAZAR

NOMBRES / GIVEN NAMES

JONATHAN FABRIZIO

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATE AND PLACE OF BIRTH

Julio

23/2009

PALMIRA VALLE

SEXO / SEX

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION / PLACE AND DATE OF ISSUE

M

CALI VALLE

Febrero

09/2011

FECHA DE VENCIMIENTO / DATE OF EXPIRY

AUTORIDAD / AUTHORITY

Febrero

09/2021

COLOMBIA MEDINA JIMERO  
SUBSECRETARIA DE PASAPORTES







REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 66.779.156  
BALCAZAR

APELLIDOS  
MARIA DEL PILAR

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-FEB-1975

PALMIRA  
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54

ESTATURA

O+

G.S. RH

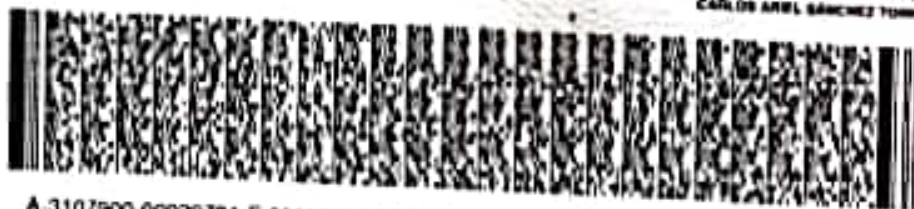
F

SEXO

31-OCT-1994 PALMIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARNEL SANCHEZ TORRES



A-3107900-00009781-F-0066-779156-20080806

0001830676A 1

2930008356



## REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL  
M.P. ÓSCAR FABIÁN COMBARIZA CAMARGO  
SALA DE FAMILIA

Santiago de Cali, dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Proyecto aprobado mediante acta No. 095

Proceso	ACCIÓN DE TUTELA
Accionante	ANA MARÍA MARULANDA ARIAS en calidad de agente oficiosa del señor MORLAN MARULANDA MEJÍA
Accionado	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, el MINISTERIO de JUSTICIA y el DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO y CARCELARIO -INPEC-
Radicado	76001 22 10 000 2020 00111 00
Asunto	Fallo de primera instancia
Decisión	Concede amparo constitucional
Ponente	ÓSCAR FABIÁN COMBARIZA CAMARGO.

### I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Se decide, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por ANA MARÍA MARULANDA ARIAS en calidad de agente oficiosa del señor MORLAN MARULANDA MEJÍA, contra la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, el MINISTERIO de JUSTICIA y el DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO y CARCELARIO -INPEC-, por la supuesta vulneración a los derechos a la vida, vida digna y seguridad social.

### II. ANTECEDENTES

En atención a la narración que hiciere el extremo actor, se compendian los siguientes hechos atinentes a la denuncia esbozada en contra de las entidades encartadas:

- Narró que el actor tiene 70 años y padece de "hiperplasia de próstata", hipertensión y cuadros clínicos de preinfarto y de desgaste en columna, fue condenado en Perú a pena privativa de la libertad de 20 años de los cuales ya ha pagado 11.

- Por razones humanitaria le fue aprobado hace 2 años por parte de la Comisión Intersectorial para el Estudio de las Solicitudes de Repatriación de Presos, la repatriación a nuestro país para que el actor termine de pagar su condena en un establecimiento penitenciario.

- La justicia peruana mediante resolución suprema Nro. 073 del 17 de abril de 2020 dispuso "Acceder a la solicitud de traslado pasivo del ciudadano de nacionalidad





Accionante MORLAN MARULANDA MEJÍA  
 Accionado Presidencia de la República y otros  
 Radicado 76001 22 10 000 2020 00111 00

colombiana MORLAN MARULANDA MEJÍA o MORLAN ROLANDO MARULANDA MEJÍA, quien se encuentra cumpliendo sentencia en el Establecimiento Penitenciario de Arequipa, para que cumpla el resto de la condena impuesta por las autoridades judiciales del Perú en un centro penitenciario de la República de Colombia".

- El INPEC le ha señalado que a la fecha las repatriaciones se encuentran suspendidas por la pandemia mundial y que una vez se normalice la situación, se iniciara el trámite correspondiente para atender las solicitudes de este tipo.

- Que dicha espera pone en grave riesgo su salud, e impide la reunificación familiar, aun cuando el accionante cuenta con todos los requisitos para ser repatriado a Colombia, puesto que de ser necesario el grupo familiar procederá a cubrir los gastos de su repatriación, en vista de que solo está pendiente que se fije fecha y hora de su materialización, esto conforme a lo informado por el gobierno Peruano, que le ha manifestado que es el estado colombiano quien debe asumir el rol de responsable para salvaguardar los derechos fundamentales mientras se define su regreso a nuestro territorio.

- Ha agotado las instancias administrativas sin encontrar solución alguna.

Por lo anterior, solicita se amparen sus derechos fundamentales, y se ordene a quien corresponda expedir las órdenes necesarias para ejecutar la repatriación.

### III. TRÁMITE PROCESAL

Mediante proveído del 3 de diciembre del año en curso fue admitida la acción constitucional, ordenándose la notificación de las accionadas y la vinculación de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Transporte, del Consulado de Colombia en Lima (Peru), el Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil, la Unidad Administrativa Migración Colombia, la Fiscalía a General de la Nación, la Dirección General de la Policía Nacional, la Cancillería de Colombia, del Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia, y al Director de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, intervinientes dentro de este tipo de asuntos, concediéndoseles el término de dos días para que se pronunciaran sobre los hechos de la tutela. Así mismo, se ofició a la Embajada del Perú en Colombia, para que, a través de su intervención ante las autoridades judiciales competentes del Perú y dentro de las relaciones de cooperación existentes, se allegara información respecto de la actual situación judicial o de condena en dicho país del accionante, solicitando además a la agente oficiosa del accionante allegara información respecto de si ha procedido a iniciar el trámite administrativo de repatriación del tutelante, en su condición de colombiano preso en el exterior, ante el Ministerio de Justicia y del Derecho a través del Consulado de Colombia. Vinculando posteriormente a la Secretaría de Salud de Bogotá y al Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de Bogotá.

- La agente oficiosa allegó petición en favor del accionante dirigida ante el Ministerio de Justicia radicada el 19 de enero de 2018, a través del cual solicitó la repatriación a nuestro país por motivos humanitarios.





- Los vinculados, Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, el Defensor del Pueblo – Regional Valle del Cauca, la Secretaría de Salud de Bogotá y el Ministerio de Transporte, coincidieron en cada una de sus contestaciones en alegar su falta de legitimación en la causa por pasiva, respecto de lo pretendido por el tutelante.

- El Ministro de Justicia y del Derecho indicó que su competencia radica en la emisión de la decisión frente a la solicitud de traslado de la persona condenada y no, en disponer las gestiones necesarias para que dicho traslado se haga efectivo desde la República del Perú hacia territorio colombiano, pues señala que una vez las autoridades peruanas comuniquen por vía diplomática la Resolución Suprema por la cual se autoriza el traslado a Colombia del accionante, la competencia para hacer efectivo el traslado hacia territorio nacional se activa para las autoridades penitenciarias de ambos países, dada la condición de persona condenada del agenciado, en coordinación con las autoridades diplomáticas.

Informando además que mediante la Resolución No. 0771 del 6 de agosto del 2018, ordenó *"ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir copia del acto administrativo al Ministerio de Relaciones Exteriores con el fin de que adelante el respectivo canje de notas con el gobierno de la República del Perú que permita hacer efectivo el traslado de la connacional.*

*ARTÍCULO CUARTO: En firme el presente acto administrativo enviar copia del mismo al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, a fin de que se coordine con las autoridades correspondientes de la República del Perú y con las autoridades pertinentes de la República de Colombia el lugar de entrega del interno MARULANDA MEJÍA MORLAN, sin perjuicio de las decisiones administrativas que por su competencia deban adoptar; a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicios al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, para los fines pertinentes; y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República del Perú",* acto administrativo que se encuentra en firme y el cual se remitió tanto al Ministerio de Relaciones Exteriores como al INPEC, mediante el oficio No. MJD-OFI190036360 de 28 de noviembre de 2019, para que dentro de sus competencias legales procedieran a coordinar el traslado del connacional, luego de que la República del Perú emitiera la respectiva aprobación frente a la solicitud de traslado.

- A su turno, el accionado Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Directora de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, sostuvo que entre Colombia y la República del Perú no existe tratado para el traslado de personas condenadas. Refrendó lo señalado en la referida Resolución No. 0771 de fecha 6 de agosto de 2018, donde el Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia autoriza el traslado del interno colombiano MORLAN MARULANDA MEJÍA, que se encuentra recluso en el Establecimiento Penitenciario de Arequipa, a fin de que cumpla el resto de la condena impuesta por las autoridades judiciales del Perú en un establecimiento penitenciario de Colombia. El 7 de noviembre de 2019 y el 13 de marzo de 2020, con el fin de realizar seguimiento a los expedientes de internos a quienes la República de Colombia le aprobó el traslado pasivo a un centro de reclusión colombiano. Mediante memorando CPELM No. 600 de fecha 20 de abril de 2020, el Consulado General de Colombia en Lima remitió la Resolución Suprema No. 073 – 2020 – JUS al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con el fin de que esta entidad informará al Instituto Nacional Penitenciario y





Accionante MORLAN MARULANDA MEJIA  
 Accionado Presidencia de la República y otros  
 Radicado 76001 22 10 000 2020 00111 00

Carcelario de Colombia (INPEC) sobre el contenido de la misma, con el propósito de que se disponga la ejecución del traslado físico a Colombia y la designación de los custodios correspondientes. Así mismo, el "13/11/2020" remitió el oficio S-GAJR-20-023829 dirigido al Brigadier General NORBERTO MUJICA JAIME, Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, por medio del cual se dio traslado de la comunicación CEPLM No. 1086 del 29 de octubre de 2020, allegada por el Consulado en la ciudad de Lima, República del Perú con ocasión de elevar ante ese instituto la solicitud formal de estudiar la posibilidad de autorizar el traslado de repatriación han sido resueltas favorablemente en el marco de la Comisión Intersectorial competente. El caso del accionante es uno de los doce casos priorizados incluidos en la alternativa sugerida al INPEC, quien respondió mediante oficio 8100- DINPE-GUINP del 18 de noviembre de 2020 que: *"a raíz de la pandemia COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud, la Resolución No. 1462 de agosto 25 hogaño emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, que establece "la prórroga de la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus (...)" la Dirección General del INPEC, en Directiva 004 del 11/03/2020 "Directrices para la prevención e implementación de medidas de control ante casos probables y confirmados de contagio de COVID-19" (...) definió que a partir de la fecha se suspenden las repatriaciones de connacionales colombianos, así como las visitas de cuerpo consular acreditado en Colombia"*.

- La accionada Dirección General del INPEC, sostuvo que para la fecha de la expedición del mencionado acto administrativo del Ministerio de Justicia y del Derecho se tenían diez (10) repatriaciones pendientes por ejecutar, de las cuales se dio cumplimiento a tres (3) y dejando pendientes (7); por lo tanto, se programó para el mes de abril del presente año la repatriación, pero dada la contingencia sanitaria a nivel mundial no fue posible efectuarla. Ahora bien, a la fecha se tienen doce (12) procesos de repatriación desde Perú a Colombia pendientes por ejecutar, que al igual que el accionante requieren del cumplimiento efectivo del trámite, por ello se pondera el del derecho a igualdad que antecede todos los connacionales que se encuentran en situaciones similares en dicho país y que también presentan por parte de la Comisión Intersectorial. De igual forma, no se puede desconocer que a raíz de la pandemia Covid-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud, la Resolución No. 1462 de agosto 25 de la presente vigencia, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, que establece *"la prórroga de la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la COVID 19, se modifican las Resoluciones 385 y 844 de 2020"*, que determina la ampliación de la contingencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de noviembre del 2020 y que va ser prorrogada nuevamente hasta el 28 de febrero de 2021. Agregó que en Directiva 004 del 11 de marzo de 2020 se impartieron *"Directrices para la prevención e implementación de medidas de control ante casos probables y confirmados de COVID-19"*, y en Anexo 01 del 12 de marzo de 2020 a dicha Directiva *"Implementación de medidas (alcance directiva 004/2020) para la prevención del contagio de COVID-19 ante la declaratoria de emergencia sanitaria"*, definió que, *"A partir de la fecha se suspenden las repatriaciones de connacionales colombianos, así como las visitas de cuerpo consular acreditado en Colombia"*, medidas que fueron tomadas de acuerdo a los parámetros internacionales y nacionales conforme a las eventualidades sanitarias.





Accionante MORLAN MARULANDA MEJIA  
 Accionado Presidencia de la República y otros  
 Radicado 76001 22 10 000 2020 00111 00

Sostuvo que los privados de la libertad que son repatriados a Colombia tienen como establecimiento de fijación el Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de Bogotá y que, por orden de la Secretaría de Salud de Bogotá, fue declarada la cuarentena inmediata hasta nueva orden en el complejo, ello imposibilita la ubicación de los privados a repatriar, tomando inviable la ubicación del connacional, ya que se pone en riesgo la vida y salud de este. Por ende, una vez se levanten las medidas determinadas en el Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de Bogotá, se iniciarán los trámites pertinentes de repatriación.

Finalizó con señalar que el proceso de repatriación se programa con un mes y medio de antelación, toda vez que se requiere de aprobación para iniciar los trámites administrativos con la Cancillería de Perú para establecer en principio las fechas, una vez se tenga la fecha de la misión se hace la asignación de funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia, se realiza la cotización de los tiquetes entre otros y esta documentación es remitida al Ministerio de Justicia y del Derecho quienes realizan la aprobación, para que sea diligenciada en la plataforma de comisiones al exterior de la Presidencia de la República con mínimo ocho (8) días de antelación, una vez el sistema autorice el procedimiento, se hace la compra de los tiquetes aéreos y se le comunica a la familia para la compra del tiquete de regreso del PPL. En tal sentido, no es posible establecer una fecha exacta de la repatriación conforme a lo dispendioso del procedimiento y la posible variación del itinerario por las condiciones de salubridad.

#### IV. CONSIDERACIONES

1. Para abordar el estudio de esta acción constitucional, sea lo primero precisar que es competente esta Sala para conocer y decidir este asunto, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, el inciso 1º numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 y el artículo 1º del Decreto 1983 de 2017.

1.1. Igualmente, se comprueba la legitimación de los intervinientes, tanto por activa como por pasiva, en la medida que la acción constitucional ha sido presentada a través de agente oficioso en vista de que el titular del derecho que se alega conculcado se encuentra imposibilitado para ejercer su propia defensa, por encontrarse en privado de la libertad en país extranjero, y, por otra parte, la acción u omisión que causa esta acción constitucional, constitutiva o no de transgresión, es predicable de los accionados.

2. Es así que, con el propósito de estudiar los pedimentos del accionante, se tiene que el estudio y concesión de la repatriación de colombianos se ha delegado al Ministerio de Justicia y del Derecho según se dispone en los numerales 5, 6, 8 y 9 del artículo 7º del Decreto 2897 de 2011 en concordancia con el 4328 del mismo año.

2.2. En la actualidad existen cinco (5) tratados sobre el «traslado de personas condenadas», empero frente a los países con los que no se tiene pacto al respecto, la Comisión Intersectorial para el Estudio de las Solicitudes de Repatriación de Presos dispuso, en reunión del 8 de abril de 2013, que pueden efectuarse migraciones de ese tipo de sujetos, siempre que se acredite: "enfermedad grave del interno debidamente certificada por el médico legista de la autoridad competente"





del Estado Trasladante o de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y primero de afinidad; edad avanzada, es decir a partir de los 65 años; estado de invalidez del interno debidamente certificada. Cumplidos y certificados los anteriores requisitos, para adelantar el respectivo trámite ante esta entidad será necesario que remitan los siguientes documentos: - copia de la sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. - solicitud del interesado de su traslado a Colombia. - certificación expedida por las autoridades (...), en la cual se indique que el delito por el cual fue condenado [allí] también está contemplado en la legislación colombiana. - original de la carta decadactilar. - informe social y psicológico del interno. - certificación de buena conducta y las posibles rebajas de pena que tenga por trabajo o estudio. - original de la evaluación médica, en la cual se indique cuál es el estado de salud del interno".

2.3. Reiteradamente la jurisprudencia ha establecido que, en principio, el juez de tutela no debe interferir en las decisiones de traslado, por hacer parte de la función y misión del director del INPEC. Sin embargo, también ha expresado que la permanencia de los reclusos en determinados penales no puede ser caprichosa ni arbitraria<sup>1</sup> - es decir, sin justificación en las causales establecidas por la ley y la jurisprudencia - cuando están de por medio derechos fundamentales que no son susceptibles de limitarse aun cuando la persona se encuentre privada de la libertad.

2.4. Así mismo, ha destacado que la búsqueda de la resocialización de los condenados y la promoción de la cooperación internacional, es afín con la Constitución Política, toda vez que en un Estado social de Derecho que se fundamenta en la dignidad humana, las penas tienen una función esencialmente resocializadora.<sup>1</sup>

2.5. Indicado que el traslado del condenado a su país de origen es concordante con la Constitución y los principios de respeto a la dignidad humana y de solidaridad puesto que "Se destaca en esa misma perspectiva la conveniencia de establecer mecanismos de asistencia y cooperación bilateral, que permitan a uno y otro Estado garantizar a sus connacionales, condenados por la comisión de delitos en el Estado transferente, cumplir con dignidad las sentencias que se les impusieron a tiempo que se rehabiliten y se preparen para incorporarse a su núcleo social de origen".<sup>2</sup>

2.6. Por lo que dicha actuación resulta positiva para el bienestar de la familia del sentenciado, puesto dicho traslado a su país de origen impacta positivamente en el bienestar de sus congéneres, los cuales pueden, en virtud de la detención de este en un país extranjero, sufrir en mayor medida dificultades maritales, económicas, sociales y emocionales<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Sentencia C-261/96. Véase igualmente: Sentencia C-655/96.

<sup>2</sup> Sentencia C-226/98.

<sup>3</sup> Finalmente, el argumento humanitario es también aplicable a las necesidades de la familia y de quienes dependen de la persona sentenciada y detenida en una prisión extranjera mientras ellos permanecen en su país de origen. Investigaciones sugieren que las familias de los prisioneros enfrentan una variedad de desafíos como consecuencia del encarcelamiento del miembro de su familia que incluyen dificultades maritales, problemas financieros y de vivienda, estigmatización social y victimización, soledad, ansiedad y dificultades emocionales. Los hijos del prisionero pueden experimentar daño psicológico y desarrollar problemas de comportamiento. Tales consecuencias indirectas de la detención es altamente probable que empeoren debido a la detención en el extranjero del miembro familiar). (traducción libre). UNODC, ob. cit., p. 12.





Accionante MORLAN MARULANDA MEJIA  
 Accionado Presidencia de la República y otros  
 Radicado 76001 22 10 000 2020 00111 00

2.7. De allí que encuentre justificación que la Convención Interamericana<sup>4</sup>, así como varios de los tratados celebrados por Colombia sobre la materia, dispongan entre los criterios que debe tomar en consideración un Estado para resolver la solicitud de traslado de la persona sentenciada, el relativo a su estado de salud y a sus vínculos familiares, ya que:<sup>5</sup> *"vii) Hace posible que los recursos se utilicen en las necesidades de rehabilitación de los prisioneros nacionales". viii) Finalmente, el traslado permite que el Estado receptor del condenado pueda controlar a este de manera previa y posterior a su liberación".*<sup>7</sup>

3. Por otro lado, en las actuaciones de las entidades públicas y de sus decisiones, las mismas deben acompañarse entre otros, por el respeto al principio del acto propio. La Corte Constitucional ha destacado que es posible la aplicación de dicho principio cuando se cumplen tres criterios, a saber: *"(i) Una conducta jurídicamente anterior, relevante y eficaz. Conducta que indica un acto o una serie de actos que exponen una determinada actitud de una persona, respecto de unos intereses vitales, la cual debe ser jurídicamente relevante, y por ende debe ser ejecutada dentro una relación jurídica. Es decir, el acto debe suscitar la confianza de un tercero o revelar una actitud, debiendo excluirse las conductas que no incidan o sean ajenas a dicha relación jurídica. En este sentido, la conducta vinculante o primera conducta, debe ser jurídicamente eficaz, por cuanto el comportamiento que se pone de relieve afecta una esfera de intereses. Pero además, hay una conducta posterior, temporalmente hablando. Así pues, el sujeto emite dos conductas: una primera o anterior y otra posterior, que es la contradictoria con aquella; (ii) El ejercicio de una facultad o de un derecho subjetivo por la misma persona o centros de interés que crea la situación litigiosa debido a la contradicción existente entre ambas conductas, lo cual atenta el principio de buena fe; y, (ii) La identidad del sujeto o centros de interés que se vinculan en ambas conductas. Entonces, conforme con lo anterior, tal y como lo ha explicado este Tribunal Constitucional, el respeto por los actos propios, siempre que se cumplan los requisitos dispuestos por la jurisprudencia, convierte en imposible el hecho de que [la entidad accionada], en el caso concreto, desconozca sus actuaciones previas, con base en las cuales ha generado en otros una situación particular y concreta."*<sup>8</sup> (subrayas fuera de texto).

3.1. Sentado lo anterior, corresponde a la Sala de Decisión determinar si en el caso objeto de estudio, las actuaciones de los accionados respecto de la materialización de la repatriación concedida al actor mediante Resolución No. 0771 de fecha 06 de agosto de 2018, trasgreden los derechos invocados.

<sup>4</sup> "6. Al tomar la decisión relativa al traslado de una persona sentenciada, los Estados Partes podrán considerar, entre otros factores, la posibilidad de contribuir a su rehabilitación social; la gravedad del delito; en su caso, sus antecedentes penales; su estado de salud; y los vínculos familiares, sociales o de otra índole que tuviere en el Estado sentenciador y en el Estado receptor".

<sup>5</sup> "c) Al tomar sus decisiones cada Estado tendrá en cuenta, entre otros criterios, la gravedad de los delitos, sus características y especialmente si se han cometido con ayuda de una organización delictiva, las posibilidades de reinserción, la edad y salud del condenado, su situación familiar, su disposición a colaborar con la justicia y la satisfacción de las responsabilidades pecuniarias respecto a las víctimas". Ley 250 de 1995, artículo 8°. Véase igualmente: artículos 10° de la Ley 285 de 1996 y 8° de la Ley 291 de 1996.

<sup>6</sup> "El Estado que ha condenado (...) puede liberar recursos que pueden ser dedicados a sus propios prisioneros y a sus necesidades de rehabilitación]. (traducción libre). UNODC, cit., p. 13.

<sup>7</sup> El Estado receptor puede asistir al prisionero en su reintegración a la sociedad, usando las herramientas disponibles de su sistema penal, por lo tanto beneficiando indirectamente la prevención del delito y el orden público.] (traducción libre). Ibidem.

<sup>8</sup> Sentencia T-122 de 2015





4. Descendiendo al caso en concreto, se tiene que al existir la firmeza del acto administrativo que dispuso la repatriación y que el mismo se le remitió tanto al Ministerio de Relaciones Exteriores como al INPEC, mediante el oficio No. MJD-OFI190036360 de 28 de noviembre de 2019, para que dentro de sus competencias legales procedieran a coordinar el traslado del connacional, y luego de que la República del Perú emitiera la respectiva aprobación frente a la solicitud de traslado, a través de Resolución Suprema Nro. 073 del 17 de abril de 2020

4.1. Sentado lo anterior, se advierte que el detonante de la formulación del amparo radica en la omisión de la materialización de la repatriación autorizada por las autoridades peruanas en abril último, cuando la Pandemia por el Covid-19 había determinado la implementación de medidas de orden sanitario, entre ellas el cierre de las operaciones aéreas internacionales, entre otras, situación que por persistir a la fecha se constituye en motivo razonable para entender que la omisión de las autoridades nacionales accionadas competentes para materializar la orden de repatriación no ha sido caprichosa, lo que descarta la procedencia del amparo de los derechos fundamentales del recluso, de los que es forzoso decir que no pueden considerarse aisladamente para privilegiarlos respecto de los de la comunidad en general como titular del derecho fundamental a la salud, pues de accederse a la pretensión tutelar de ordenar la materialización de su traslado, dicha prerrogativa que involucra el interés público resultaría amenazada, lo que no es de recibo; se trata de un caso de ponderación de derechos que debe resolverse haciendo prevalecer el interés general sobre el particular.

4.2. Con todo, tal como se reseñó en líneas anteriores y conforme a los postulados jurisprudenciales objeto de estudio, lo cierto es que en la entidad accionada existe la obligación constitucional de prodigar un trato preferencial a las personas que se encuentren en circunstancias de especial protección, y para lo que aquí interesa, aquellas que por su condición persona de la tercera edad y padecer una enfermedad catastrófica deben tener un trato preferencial por parte del Estado que sin perjuicio de conciliarse con el prevaleciente interés general, tampoco puede diluirse de manera de perpetuarse la anormal situación indefinidamente, porque esto entraña también amenaza de lesión de los derechos fundamentales del agenciado, para cuya protección se impone conceder su amparo en el sentido de disponer que por parte de las accionadas se proceda en las esferas de sus competencias propias a surtir desde los trámites administrativos faltantes, de modo de posibilitarse la materialización del traslado del recluso dentro de un término no mayor de CUARENTA Y CINCO DÍAS, pero a condición de que así lo permitan las determinaciones que por razones de orden público adopten las autoridades sanitarias colombianas, para la protección de la comunidad en general contra el contagio por Covid-19.

5. Así las cosas, evidenciada la amenaza de vulneración de los derechos fundamentales de debido proceso, unidad familiar y dignidad humana del actor, la Sala los TUTELARÁ y, en consecuencia, se ordenará a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho, al Cónsul de Colombia en Lima (Perú), al Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a la Secretaría de Salud de Bogotá y al Director del Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de Bogotá, cada uno en lo de su competencia, para que dentro del término de cuarenta y cinco (45) días siguientes a la notificación de este fallo, realicen, aprueben y ejecuten el proceso de repatriación del accionante, decisión que una vez aprobada





Accionante MORLAN MARULANDA MEJÍA  
Accionado Presidencia de la República y otros  
Radicado 76001 22 10 000 2020 00111 00

se diligenciará en la plataforma de comisiones al exterior de la Presidencia de la República dentro de los ocho (8) días siguientes, para la autorización del procedimiento, siempre y cuando las condiciones sanitarias por causa del Covid-19 lo permitan y en atención a las consideraciones aquí expuestas.

#### V. DECISIÓN

Dadas las anteriores consideraciones, la Sala de Decisión Primera de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por mandato Constitucional,

#### VI. RESUELVE:


**PRIMERO. TUTELAR** los derechos fundamentales de debido proceso, unidad familiar y dignidad humana del señor MORLAN MARULANDA MEJÍA.

**SEGUNDO. ORDENAR** a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho, al Cónsul de Colombia en Lima (Perú), al Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a la Secretaría de Salud de Bogotá y al Director del Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de Bogotá, cada uno en lo de su competencia, para que dentro del término de cuarenta y cinco (45) días siguientes a la notificación de este fallo, realicen, aprueben y ejecuten el proceso de repatriación del accionante, decisión que una vez aprobada se diligenciará en la plataforma de comisiones al exterior de la Presidencia de la República dentro de los ocho (8) días siguientes, para la autorización del procedimiento, siempre y cuando las condiciones sanitarias por causa del Covid-19 lo permitan y en atención a las consideraciones aquí expuestas.


**TERCERO. NOTIFICAR** este fallo a las partes e intervinientes por medio de oficio, correo electrónico, telegrama, fax o por el medio más expedito.

**CUARTO.. ENVIAR** la actuación digital a la Corte Constitucional para su eventual revisión, tal como lo tiene previsto el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 en los términos señalados en la Circular No. PCSJC20-29 de 2020 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, en caso de no ser impugnado.

Notifíquese y cúmplase.

  
**ÓSCAR FABIÁN COMBARIZA CAMARGO**  
Magistrado

  
**JESÚS EMILIO MÚNERA VILLEGAS**  
Magistrado

  
**CARLOS HERNANDO SANMIGUEL CUBILLOS**  
Magistrado





El futuro  
es de todos

Cancillería  
Consulado de Colombia  
en Lima

### ACTA DE DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL

En el Establecimiento Penal Callao, Callao - Perú, a los 26 (veintiséis) días del mes de febrero del año 2019, notifiqué al señor **CARDONA BEJARANO JAIME TULIO** identificado con cédula de ciudadanía N.º 19.139.057, el contenido de la resolución N.º 151, de fecha 11 de febrero de 2019, por medio del cual el Ministerio de Justicia y Del Derecho decidió autorizar su traslado a Colombia.

Para lo cual, se hace entrega de copia íntegra del acto administrativo y se le informa que, de acuerdo con lo dispuesto en la parte resolutive de la resolución, que contra el citado acto administrativo procede el recurso de reposición el cual podría interponerse dentro de los (10) días siguientes a la fecha de la presente diligencia

Dado lo anterior, yo, **CARDONA BEJARANO JAIME TULIO**, una vez revisado el contenido de la presente notificación y de la Resolución en mención, por la cual se decide mi solicitud de traslado a Colombia, informo que **SI** estoy de acuerdo con el contenido del mismo y, por tanto, renuncio a los términos para interponer los recursos administrativos que proceden de acuerdo con la ley vigente sobre la materia.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron:

  
**CARDONA BEJARANO JAIME TULIO**  
CC. N.º 19.139.057



  
**MARIA DEL PILAR CRUZ SILVA**

Cónsul

Consulado General de Colombia en Lima - Perú

Avenida José Pardo 434, Edificio Lit One, Oficina 102, Distrito de Miraflores, Lima  
PBX +51 1 3990800  
lima.consulado.gov.co - contactenos@cancilleria.gov.co  
Lima, República del Perú.



República de Colombia



Ministerio de Justicia y del Derecho

RESOLUCIÓN NÚMERO **0151** DE 11 FEB 2019

Por la cual se decide una solicitud de Traslado a Colombia

**LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO**

en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere el Decreto 1427 de 2017 y,

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Decreto N° 4328 del 11 de noviembre de 2011 se creó la Comisión Intersectorial para el estudio de las solicitudes de Repatriación de Presos, la cual tiene como función "estudiar y recomendar al Ministro de Justicia y del Derecho sobre la decisión a tomar frente a las solicitudes de repatriación que sean sometidas a su consideración por conducto de la Oficina de Asuntos Internacionales<sup>1</sup> del Ministerio de Justicia y del Derecho, con fundamento en los instrumentos legales y en observancia de los tratados internacionales".

Que el Ministerio de Justicia y del Derecho, en cabeza de la Dirección de Asuntos Internacionales según lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto 1427 de 2017, tiene entre otras funciones, la de ejercer la Secretaría Técnica de la instancia competente para el estudio de las solicitudes de traslado de personas condenadas, así como estudiar, tramitar y proyectar para la firma de la Ministra, los actos administrativos relativos a dicho trámite.

Que potestativamente y mediando voluntad por parte del Estado Trasladante, procede el estudio de la presente solicitud, en observancia del principio de reciprocidad consagrado en el artículo 226 de la Constitución Política de Colombia, el cual es entendido como el criterio

<sup>1</sup> Hoy Dirección de Asuntos Internacionales conforme a lo dispuesto en el Decreto 1427 de 2017.



0151

Hoja N° 2 de la Resolución "Por la cual se decide una solicitud de Traslado a Colombia."

base respecto del cual los Estados regulan las relaciones internacionales, ya sea porque se encuentre previsto en un acuerdo, tratado o convenio suscrito o porque es la voluntad unilateral de un Estado, el dar trato recíproco a otro Estado, ya sea por aplicación de la costumbre o por la simple práctica. Constitucionalmente este principio es base en el manejo de las relaciones internacionales<sup>2</sup>, sin distinción entre sus formas, ya sea legal o diplomática; principio que a nivel jurisprudencial ha sido desarrollado y además reconocido en diferentes fallos constitucionales y de tutela<sup>3</sup>, por parte de la Corte Constitucional.

Que ante la inexistencia de un Tratado de traslado de personas condenadas entre la República de Colombia y la República del Perú, las solicitudes de traslado deben sujetarse al principio de reciprocidad y al cumplimiento de estrictos criterios humanitarios establecidos por la Comisión Intersectorial para el Estudio de las Solicitudes de Repatriación de Presos<sup>4</sup>.

Que el ciudadano colombiano **CARDONA BEJARANO JAIME TULIO**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.139.057, quien se encuentra actualmente privado de la libertad en el Establecimiento Penal del Callao en la República del Perú con ocasión de la condena a quince (15) años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas, solicitó su traslado a la República de Colombia a fin de terminar de cumplir en este país la condena privativa de la libertad impuesta por las autoridades judiciales peruanas, petición fundada en su estado de salud y en su avanzada edad.

Que los miembros de la Comisión Intersectorial para el Estudio de las Solicitudes de Repatriación de Presos estudiaron la solicitud de traslado del ciudadano antes mencionado en sesión No. 42 de fecha 24 de octubre de 2018, dando cuenta de los documentos allegados por vía diplomática y que conforman el expediente del connacional en mención.

Que luego de revisar la documentación, los miembros de la Comisión Intersectorial constataron que se trata de un ciudadano colombiano, condenado y privado de la libertad por las autoridades judiciales peruanas, el cual según los informes médicos allegados, padece de diversas patologías como "Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial, Lumbalgia, Dispepsia, Gastritis crónica y Síndrome prostático"; además de constatar según copia de su documento de identidad que nació en Armenia (Quindío), el 5 de junio de 1951, por lo que actualmente cuenta con sesenta y siete (67) años de edad, situación que lo enmarca como adulto mayor.

Que los miembros de la Comisión Intersectorial para el Estudio de las Solicitudes de Repatriación de Presos, determinaron que, el connacional es un adulto mayor que supera los 65 años de edad, situación que se ajusta en los criterios humanitarios establecidos por la Comisión; y que encuentra refuerzo en las patologías que padece.

Que luego de analizar las circunstancias antes esbozadas, los miembros de la Comisión Intersectorial determinaron que procede lo solicitado de conformidad con los criterios humanitarios establecidos y, en consecuencia, decidieron recomendar a la señora Ministra de Justicia y del Derecho el traslado del señor **CARDONA BEJARANO JAIME TULIO**, a territorio colombiano de conformidad con lo consignado en el Acta N° 42 de fecha 24 de octubre de 2018.

<sup>2</sup> Constitución Nacional, Artículo 226. El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.

<sup>3</sup> Sentencia C-893/09; Sentencia T-716/96; Sentencia T-557/05.

<sup>4</sup> Los criterios humanitarios fueron establecidos por la Comisión Intersectorial en sesión del 8 de abril de 2013, conforme al Acta N° 7 y redefinidos en el comité extraordinario que se celebró el día 18 de febrero de 2014, conforme al Acta N° 11.



Hoja N° 3 de la Resolución "Por la cual se decide una solicitud de Traslado a Colombia."

Que el traslado del ciudadano colombiano **CARDONA BEJARANO JAIME TULIO**, desde la República del Perú hacia la República de Colombia se dirige a cumplir el propósito del trámite de traslado de personas condenadas; esto es, purgar en territorio colombiano el resto de la condena de prisión impuesta en el extranjero, sin perjuicio de los beneficios que el condenado podría llegar a obtener de conformidad con las normas internas de reclusión en la República de Colombia.

Que para la ejecución efectiva del trámite solicitado, las autoridades de la República del Perú trasladarán a un lugar en su territorio mutuamente acordado con las autoridades colombianas, a los funcionarios de escolta del Estado Receptor correspondientes, que tienen a cargo el traslado del interno **CARDONA BEJARANO JAIME TULIO**, desde la República del Perú hacia la República de Colombia.

Que a fin de verificar el cumplimiento de la condena impuesta al señor **CARDONA BEJARANO JAIME TULIO**, las autoridades de ejecución de penas de la República de Colombia proporcionarán información a las autoridades de la República del Perú con relación al estado de ejecución y cumplimiento de la condena impuesta, previa solicitud proveniente de las autoridades peruanas; debiendo informar sin requerimiento, la fecha en que el interno sea liberado y el otorgamiento de la libertad condicional. En caso de presentarse un hecho de fuga, las autoridades penitenciarias a cargo de la custodia y vigilancia del interno, deberán informar el hecho sin demora a las autoridades peruanas a través de este Ministerio.

Que el presente acto administrativo se encuentra fundamentado en la recomendación emitida por la Comisión Intersectorial para el Estudio de las Solicitudes de Repatriación de Presos en el marco del comité ordinario celebrado el día 24 de octubre de 2018, de conformidad con el Acta N° 42 de la misma fecha.

En mérito de lo expuesto,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar el traslado del ciudadano colombiano **CARDONA BEJARANO JAIME TULIO**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.139.057, quien se encuentra actualmente privado de la libertad en el Establecimiento Penal del Callao en la República del Perú con ocasión de la condena a quince (15) años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas, a la República de Colombia para terminar de cumplir la condena privativa de la libertad proferida por las autoridades judiciales peruanas. Lo anterior, de conformidad con la parte considerativa del presente acto administrativo.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar esta decisión al señor **CARDONA BEJARANO JAIME TULIO**, a través del Consulado General de Colombia en la República del Perú, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

**ARTÍCULO TERCERO:** Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir copia del acto administrativo al Ministerio de Relaciones Exteriores con el fin de que adelante el respectivo



Hoja N° 4 de la Resolución "Por la cual se decide una solicitud de Traslado a Colombia."

canje de notas con el gobierno de la República del Perú que permita hacer efectivo el traslado del ciudadano colombiano **CARDONA BEJARANO JAIME TULIO**.

**ARTÍCULO CUARTO:** En firme el presente acto administrativo enviar copia del mismo al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, a fin de que se coordine con las autoridades correspondientes de la República del Perú y con las autoridades pertinentes de la República de Colombia el lugar de entrega del interno **CARDONA BEJARANO JAIME TULIO**, sin perjuicio de las decisiones administrativas que por su competencia deban adoptar; a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, para los fines pertinentes; y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República del Perú.

**ARTÍCULO QUINTO:** La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, D.C., a los 11 FEB 2019

  
**GLORIA MARÍA BORRERO RESTREPO**

Revisó y Aprobó: Directora de Asuntos Internacionales 





PERÚ

Ministerio de  
Justicia y Derechos  
Humanos

Instituto  
Nacional Penitenciario

Coordinación de Traslados  
Internacionales

## NOTIFICACIÓN

SEÑOR : JAIME TULIO CARDONA  
BEJARANO

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO : Ancón II

ASUNTO : Aprobación de traslado a su país  
de origen

REF. : R. S. N° 039-2020-JUS

Por medio del presente, se le hace llegar copia de la resolución suprema de la referencia por el cual el Estado Peruano accede a su solicitud de traslado pasivo para que cumpla el resto de la condena impuesta por nuestras autoridades judiciales en un establecimiento penitenciario de la República de Colombia, lo que se hace de su conocimiento para los fines pertinentes.

Lima, 28 de febrero de 2020

Atentamente,

RVL/msv



Lic. ROCÍO MAGNOLIA VALDEZ LÓPEZ  
Directora  
Dirección de Medio Libre



- Y COMO ULTIMO RECURSO ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE MI REPATRIACION FISICA, LES SOLICITARIA DE ESTUDIAR LA POSIBILIDAD DE QUE MI FOLDER CON TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA, QUE REPOSA EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO PENITENCIARIO - INPE - TRASLADOS INTERNACIONALES, BAJO LA COORDINACION Y RESPONSABILIDAD DE LA ABOGADA MERCEDES SANTIILLAN, SEAN TRASLADOS, A TRAVES DE LA CANCELLERIA Y ME SEA ASIGNADO UN JUEZ DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, A QUIEN LE PODRIA SOLICITAR MI LIBERTAD CONDICIONAL EN RAZON A QUE ESTOY CONDENADO A (15) AÑOS PRIVATIVOS DE LIBERTAD Y EN COLOMBIA DE ACUERDO AL CODIGO PROCESAL PENAL, SE TIENE DERECHO A DISFRUTAR DE LA LIBERTAD CONDICIONAL CON LAS 3/5 PARTES, DE LA CONDENA Y EN MI CASO SERIAN DE (9) NUEVE AÑOS Y CUENTO CON TIEMPO EFECTIVO DESDE EL (17) DIESISIETE DE SEPTIEMBRE DEL 2010 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2020, TENDRIA (10) DIEZ AÑOS Y (3) TRES MESES FISICOS, Y ADEMAS SE SUMARIAN (8) OCHO AÑOS POR TRABAJO, DESCONOCIENDO A CUANTOS AÑOS TENDRIA DERECHO A REDIMIR POR TRABAJO. ES DECIR ESTARIA PASADO A OBTENER MI LIBERTAD EN COLOMBIA.

ADEMAS, PODRIAN PONER EN CONSIDERACION LA RECOMENDACION EXPEDIDA POR LA OINW PIDE LIBERACION DE PRISIONEROS VULNERABLES POR CAUSA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS."

"E... LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS PIDIO LA REDUCCION DEL NUMERO DE PERSONAS EN DETENCION ANTE EL INMINENTE RIESGO QUE SE AVISORA POR EL CRECIMIENTO DEL CORONAVIRUS EN GRAN PARTE DEL MUNDO."